

**XXXIV Congreso Internacional de Estudios Electorales:
Representatividad y legitimidad en la construcción democrática
17-20 octubre de 2022. Tijuana, Baja California, México**

Tema de trabajo: VII Estudios de Género
Coordinadora: Esperanza Palma

La paridad funambulesca en los gobiernos locales

Dra. Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara

Universidad Autónoma de Nayarit

Lpacheco_1@yahoo.com

Francisco Javier Urciaga Espinoza

Universidad Autónoma de Nayarit

j_urciaga@hotmail.com

Resumen

Cuatro años han transcurrido desde el 6 de junio de 2019 cuando se reformó la Constitución General de la República para incorporar la obligatoriedad de la paridad en los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en los tres órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal y en los organismos autónomos. Sin embargo, el incumplimiento es la norma.

Sólo se registra un caso en el cual se acata la paridad: la postulación de candidaturas para los cargos de elección popular que realizan los partidos políticos. Ese cumplimiento se debe a que, en caso de omitirlo, el Instituto Nacional Electoral (INE), simplemente no registra las listas. La amenaza de la sanción ha logrado que los partidos políticos cumplan con candidaturas paritarias.

En el resto de poderes y órdenes se carece de sanciones, lo que no significa que el cumplimiento de la paridad quede a la voluntad de quienes deban cumplirla, sino que las leyes no pueden establecer sanciones para el supuesto de cada conducta omisa, puesto que se trata de mandatos que obligan a las autoridades.

Introducción

En el presente texto se aborda el incumplimiento de la paridad en la integración del gobierno estatal de Nayarit, después de la aprobación constitucional de la paridad (06/06/2019), así como las acciones que se han realizado por activistas para su cumplimiento. La colectiva Mujeres en Voz Alta (MEVA) interpuso un amparo contra la integración no paritaria del gabinete del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien tomó posesión del cargo el 19 de septiembre de 2021 para instarlo a integrar su gabinete de acuerdo al principio constitucional de paridad.

El objeto del texto es exponer la ruta que siguió el amparo de Nayarit para lograr la paridad en el poder ejecutivo con la finalidad que sea parte de las acciones desarrolladas por las mujeres activistas para el cumplimiento de derechos. Si bien, Nayarit ha abierto una ruta para judicializar el cumplimiento de la paridad, debe ponderarse esa ruta a fin de que la paridad sea un derecho efectivo de las mujeres.

La subrepresentación en el Poder Ejecutivo

Si bien se ha avanzado en la representación de las mujeres en el poder legislativo, no ocurre lo mismo en el poder ejecutivo. En los 70 años en que fueron reconocidos los derechos político electorales de las mujeres mexicanas (1953-2023), en Nayarit no se ha electo a mujeres para ocupar la gubernatura.

Las mujeres que han ocupado cargos en el Poder Ejecutivo se muestran a continuación:

Cuadro 1. Mujeres en el Poder Ejecutivo 1953-2023

Nombre	Secretaría	Gobernador	Periodo
Rosario Santoyo	Contralora	Celso H. Delgado Ramírez	1987-1993
Beatriz Eugenia Marisela Munguía Macías	Secretaría de la Contraloría	Antonio Echevarría Domínguez	1999-2005
Brisa Madrid Medina Franco	Secretaría del Trabajo	Ney Manuel González Sánchez	2011-2011
Rocío Alejandra Victoria Flores Velázquez	Secretaría del Trabajo	Ney Manuel González Sánchez	2005-2010

Angélica Patricia Sánchez Medina	Secretaría General	Ney Manuel González Sánchez	2011-2011
Cora Cecilia Pinedo Alonso	Secretaría General	Ney Manuel González Sánchez	2005-2009
Vielka Irais Rivera	Secretaría de Economía	Ney Manuel González Sánchez	2010-2011
Leticia Pérez García	Secretaría de Educación	Roberto Sandoval Castañeda	2011-2015
Yeniria Catalina Ruiz Ruiz	Secretaría de Turismo	Roberto Sandoval Castañeda	2015-2016
Margarete Moeller Porras	Secretaría de Educación	Antonio Echevarría García	2017-2018
Sonia Nohelia Ibarra Fránquez	Secretaría de Desarrollo Social	Antonio Echevarría García	2017-2021
Ana Cecilia Llanos Guzmán	Secretaría de Turismo	Antonio Echevarría García	2018-2020
Myrna Araceli Manjarrez Valle	Secretaría de Educación	Miguel Ángel Navarro Quintero	2021-vigente
Sistiel Karime Buhara Lora	Secretaría de Movilidad	Miguel Ángel Navarro Quintero	2021-vigente
María Isabel Estrada Jiménez	Secretaría para la honestidad y la buena gobernanza	Miguel Ángel Navarro Quintero	2021-vigente
Dora Cecilia Espinoza González	Secretaría para el bienestar y la igualdad sustantiva	Miguel Ángel Navarro Quintero	2021-vigente
María de los Ángeles Mares López	Secretaría del trabajo y justicia laboral	Miguel Ángel Navarro Quintero	2021-vigente
Rocío Esther González García	Secretaría General	Miguel Ángel Navarro Quintero	2023-vigente

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Nayarit y prensa local de Nayarit, 2023.

Si bien, la paridad no obligaba en los gobiernos anteriores, a partir de la reforma de 2019, ello es obligatorio, pero se carece de mecanismos eficientes para lograr su cumplimiento.

Los derechos políticos de las mujeres

Se pueden distinguir tres etapas en los derechos políticos de las mujeres. La primera se refirió a la incorporación de normas genéricas cuya finalidad era hacer avanzar la situación política de las mujeres en relación a los contenidos de los instrumentos internacionales en vinculación con movimientos de mujeres mexicanas que reclamaban una incorporación diferente en el pacto social tendiente a establecer otra relación entre el Estado y las mujeres. Para ello, se modificó el párrafo segundo del artículo 4º. Constitucional que estableció “El varón y la mujer son iguales ante la ley”¹. Esa reforma se realizó el último día de 1974, ya que en 1975 México sería sede de la primer Conferencia Mundial Internacional de la Mujer.

En relación a los procesos electorales, el impulso al avance de las mujeres se concretó en 1993 en el Código Federal de Procedimientos Electorales (COFIPE), el cual instaba a los partidos políticos a promover la postulación de mujeres a cargos de elección², sin que esta disposición constituyera una obligación y mucho menos prescribiera sanciones por incumplimiento. En 1996 se estableció que las candidaturas a la asamblea legislativa federal no excederían del 70 por ciento para un mismo género³, disposición con la cual se consideró que México adoptaba un sistema de cuotas. Sin embargo, al igual que la disposición de 1993, carecía de sanción por lo que prácticamente los partidos políticos promovieron poco la participación de las mujeres a cargos de elección. Las leyes electorales de las diversas entidades federativas fueron incorporando esas mismas modificaciones de manera heterogénea (Pacheco 2007, 33), lo mismo que los estatutos de los principales partidos políticos.

La segunda etapa de los derechos políticos de las mujeres se logró establecer el sistema de cuotas de manera obligatoria, puesto que originalmente se trataba solo de recomendaciones a los partidos políticos. Para lograr la obligatoriedad, contribuyó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de marzo de 2002 que no declaró inconstitucionales las cuotas de género

¹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma del 31 de diciembre de 1974.

² “Los partidos políticos, promoverán en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”. Cofipe. 1993. Artículo 175- III.

³ “Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género. Asimismo, promoverán la mayor participación política de las mujeres”. Cofipe 1996. Adición a la fracción XXII, transitoria del artículo 5.

(DOF 2002). En ese mismo año se estableció, en el COFIPE, la obligatoriedad de las cuotas a nivel federal al establecer sanciones a los partidos políticos que las incumplieran. Las acciones actuaron como mecanismos de cumplimiento de las normas, puesto que las sanciones se referían desde amonestar al partido hasta negar el registro de la lista de candidatos. Sobre todo, la negación a registrar candidaturas, obligó a los partidos políticos a cumplirlas. Las disposiciones se ampliaron a las listas de representación proporcional y a las candidaturas postuladas por coaliciones. Se exceptuó de lo anterior, las candidaturas que se hicieran por vía de elección directa⁴. Esto último se convirtió en la principal manera de incumplir la obligatoriedad puesto que las dirigencias de los partidos políticos encontraron la manera de no dar cumplimiento a las cuotas.

La reforma al COFIPE del 14 de mayo de 2008 estableció la proporción 60/40 en las cuotas de género, de las cuales se volvieron a exceptuar las candidaturas de mayoría relativa que fuesen resultado de un proceso de elección democrático. De nueva cuenta, dio lugar a un manejo discrecional de la clase dirigente de los partidos⁵. También se estableció que la integración de las listas por el principio de representación proporcional, en cada tramo de cinco candidaturas, se colocaran dos candidaturas de sexo distinto en forma alternada y de manera repetida y sucesiva.

El resultado del diseño de las cuotas fue que los partidos encontraron la manera de evitar el impacto que la ley preveía de aumentar el número de mujeres candidatas y por esa vía, incrementar la participación de las mujeres en las asambleas legislativas al proponerlas en las suplencias y no en las candidaturas titulares. La omisión de la ley dio lugar a episodios

⁴ “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, en ningún caso se incluirán más del 70 por ciento de candidatos propietarios de un género (artículo 175-A); “Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de lo que señale la normatividad interna y el procedimiento de cada partido político (artículo 175-B); “3. Quedan exceptuadas las candidaturas relativas que sean resultado de un proceso de elección mediante el voto directo”. Cofipe. 2002. (Artículo 175-C.

⁵ “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género. Artículo 221-3. Quedan exceptuadas de lo señalado en los párrafos 1 y 2 del presente artículo las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección interna mediante voto directo”. Cofipe. 2008. Artículo 219-1.

surrealistas de la vida política mexicana que mostraron las intencionalidades de los partidos políticos de acatar, sin cumplir, el avance político de las mujeres, cuando en la primera sesión ordinaria de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados Federal correspondiente al periodo de 2009-2012, ocho diputadas propietarias de diversos partidos políticos solicitaron licencia para separarse de su cargo, lo que dio lugar a que ocho suplentes varones asumieran la titularidad de la diputación, (como señalaron Méndez y Garduño en La Jornada, el 2 de octubre de 2019). La otra fisura del diseño de la ley, la encontraron los partidos, en la disposición de exceptuar las cuotas de género en las candidaturas de mayoría relativa que fuesen producto de un proceso democrático al interior del partido, ya que tal criterio fue esgrimido para incumplir la cuota en diversos casos.

Fue el TEPJF quien, al resolver un Juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, dictó sentencia favorable a las demandantes mediante la cual perdieron sustento los argumentos de los partidos para dejar fuera de la democracia electoral a las mujeres. Lo que había cambiado, en las contiendas electorales, era el marco regulatorio de los derechos políticos de las mujeres que, para esa fecha, consistían en:

- La reforma constitucional de 2011 donde, los derechos de las mujeres se reconocieron a nivel constitucional y se estableció la obligatoriedad de lo dispuesto en los convenios y tratados internacionales,
- El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe-2008),
- La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003),
- La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006),
- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (2007) y
- La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (2008)

También, lo que había cambiado era la conformación de las mujeres como actores políticos puesto que militantes de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano⁶ promovieron, el 7 de noviembre de 2011, un JDC contra el Acuerdo CG327/2011, del Consejo General del Insituto Federal Electoral (IFE) ante la

⁶ Laura Cerna Lara, María Cruz García Sánchez, María de las Nieves García Fernández, María de los Ángeles Moreno Uriegas, María Elena Chapa Hernández, María Fernanda Rodríguez Calva, María Juana Soto Santana, Martha Angélica Tagle Martínez, Refugio Esther Morales Pérez, y Rocío Lourdes Reyes Willie.

Secretaría Ejecutiva del IFE, la cual fue turnada al TEPJF, junto con otra demanda en el mismo sentido formulada el 8 de noviembre, que dio origen a la sentencia SUP-JDC-12624/2011.

Por ello, en 2012, por primera vez en la democracia mexicana las mujeres tuvieron la posibilidad real de no solo ser nominadas como candidatas a la asamblea legislativa, sino de convertirse realmente en representantes. La sentencia 12624⁷, establecía la obligatoriedad de que tanto las candidaturas propietarias como las suplentes, en el caso de las mujeres, fuesen del mismo género. El criterio, tuvo carácter de obligatoriedad y exigibilidad en procesos electorales, siendo vinculatorio para candidaturas por los principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, a fin de que, en ausencia o renuncia de la propietaria, la sustitución se realizara por otra mujer sin afectar la proporcionalidad de mujeres y hombres en las Cámaras para las que fueron electas.

La tercera etapa de los derechos políticos de las mujeres, correspondiente a la Democracia Paritaria, inicia en México con la reforma del 10 de febrero de 2014 (DOF 2014) la cual contiene la obligación de aplicar el principio de paridad de género en candidaturas para la Asamblea Federal, las Asambleas legislativas de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México. El segundo paso para llegar a la paridad como principio de integración del poder público, se realizó en junio de 2019, mediante reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución General de la República donde se establece la paridad entre mujeres y hombres como principio para el acceso a puestos de representación, en cargos públicos de los tres poderes y en empleos de la administración. La paridad se convierte en un principio para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres como marco normativo con el cual se contribuye a transitar a una democracia incluyente y plural en el ámbito de los derechos políticos.

El principio de paridad debe ser considerado el principal instrumento para construir igualdad sustantiva en los diversos ámbitos de la vida política del país (Peña 2014, 35), lo que incluye a diversos poderes constituidos, sobre todo, al Poder Ejecutivo.

⁷ SUP-JDC-12624/2011, Jurisprudencia 16/2012. Cuota de género. Las fórmulas de candidatos a diputados y senadores por ambos principios deben integrarse con personas del mismo género. Tesis XXI/2012 Equidad de género. Interés jurídico para promover juicio para la protección de los Derechos Político-electorales del Ciudadano (JDC).

La paridad en las normas de Nayarit

El 6 de junio de 2019 se reformó la Constitución General de la República, misma que señala la obligatoriedad de la paridad en los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los tres órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal en todo el territorio nacional.

El día 03 de junio del año 2019 se reformó el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, que tiene por objeto garantizar la paridad de género en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y entró en vigor el día 19 de septiembre del 2021 según el artículo segundo de los transitorios.

Posteriormente, el 10 de Septiembre de 2020, el H. Congreso del Estado de Nayarit, aprobó el Dictamen que reforma y adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de paridad de género en sus artículos 7º Fracción I párrafo tercero, artículo 17 fracción I, artículo 26 párrafo segundo, artículo 69 fracción XII, artículo 81 en su párrafo segundo y tercero, artículo 85 en su numeral 1, el artículo 100 en su párrafo primero, artículo 101 en el párrafo cuarto, el artículo 107 y la fracción I del Apartado A del artículo 135, publicado el 06 de Octubre de 2020 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

Las acciones de la sociedad civil

Una vez transcurridas las elecciones para renovar la gubernatura en junio de 2021, para las cuales entraría en vigor el postulado de paridad en el Poder Ejecutivo, antes de la toma de protesta del gobernador electo, Miguel Ángel Navarro Quintero, en agosto 2021, la sociedad civil organizada a través del grupo *Mujeres en Voz Alta* (MEVA), le hace llegar un pronunciamiento denominado *Paridad en todo, armonización legislativa y atención a la alerta de género en Nayarit*, así como a la Diputada Presidenta del Poder Legislativo Alba

Cristal Espinosa y a la presidencia del Poder Judicial. A través de ese pronunciamiento, el grupo MEVA señala:

- La obligatoriedad de la integración paritaria del Poder Ejecutivo, en base a la reforma del 6 de junio de 2019 a la Constitución General de la República, así como a la reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit del 06 de octubre del 2020 que señala la obligatoriedad de la paridad en los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los tres órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal en todo el territorio nacional;
- La obligatoriedad de la paridad total en el Poder Judicial del Estado, respecto de la integración de las magistradas y magistrados numerarios del Poder Judicial del Estado, y los organismos autónomos.

Además de lo anterior, el grupo en cuestión también señaló la necesidad de la armonización de la legislación de igualdad de Nayarit respecto de la legislación nacional y los Tratados Internacionales en materia de igualdad, así como la necesidad de considerar un presupuesto con perspectiva de género para el 2022, lo que permitiría asignar y etiquetar recursos públicos con la finalidad de que impacten positivamente y de forma transversal en políticas públicas tendiente a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Poder Ejecutivo sin paridad

El gobernador tomó posesión el 19 de septiembre de 2021. Ese mismo día realizó la designación de integrantes de su gabinete. Al hacerlo, no observó el principio constitucional de paridad de género a que estaba obligado, puesto que, de 13 secretarías de estado, solamente nombró a cuatro mujeres. En nueve secretarías de estado fueron nombrados hombres como titulares.

Además, nombró a 12 hombres como titulares de organismos públicos descentralizados de un total de 37. Ante esos hechos, el grupo en cuestión, MEVA, el día 07 de octubre de 2021 promovió amparo indirecto ante los juzgados de distritos. El concepto de violación se hizo

consistir en que respecto, a las secretarías en la administración pública centralizada, se incumplía en forma absoluta con el principio de paridad de género contemplado en los artículos 41 y tercero transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil diecinueve, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, fracción XII y tercero transitorio de la reforma publicada en el periódico oficial de la entidad el seis de octubre de dos mil veinte, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

El hecho de que no se integrara el gabinete centralizado a partir del principio de paridad, implicó una violación a las normas establecidas, un retroceso en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y una subrepresentación en la toma de decisiones. Además de lo anterior, constituye una grave violación a los derechos humanos, a los derechos políticos de representación y de acceso a los cargos públicos. Todo lo anterior hace nugatorias las reformas de paridad y reproduce condiciones de desigualdad estructural entre los géneros.

La inobservancia de la paridad, en los hechos, anula el propósito de la reforma, en el sentido de incluir a las mujeres en la toma de decisiones en los asuntos públicos, en virtud de que, las mujeres a lo largo de la historia han estado subrepresentadas en los espacios de poder. Por ello, se considera que la paridad en todo se refiere a la participación equilibrada, justa, y legal, que asegura que, al igual que los hombres, las mujeres tengan una representación igualitaria en la vida democrática de la entidad.

Posterior a la interposición del amparo por el grupo MEVA, el ejecutivo del estado, designó a diez mujeres como titulares de los organismos públicos descentralizados.

Una vez interpuesta el amparo, el 20 de octubre de 2021, el gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero se pronunció y se dijo respetuoso del juicio de amparo promovido por las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para que su administración cumpliera con la paridad de género en su periodo. Anunció la realización de ajustes en su gabinete, incluso, pidió al Secretario General de Gobierno Juan Echegaray hiciera una

revisión para progresivamente cumplir con el mandato de paridad.

Con fecha 07 de marzo de 2022, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y juicios federales en el estado de Nayarit decidió no entrar al fondo del asunto y dictó sobreseimiento por no encontrar interés legítimo en quienes habían interpuesto el amparo.

El argumento esgrimido por la colectiva Mujeres en Voz Alta, sostenía que la participación y representación de las mujeres beneficia directamente a todas las mujeres, y desde luego, a las promoventes del amparo, e impacta en la esfera jurídica de las mujeres, de manera colateral al introducir la voz y perspectiva de las mujeres en la deliberación pública.

Siguen las acciones legales por parte de la sociedad civil

El grupo promotor del amparo, con fecha 28 de marzo de 2022 presentó el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en la ciudad de Tepic. Recurso de Revisión que fue admitido el día 25 de mayo del 2022. Con anterioridad a la interposición de ese recurso de revisión, el día 11 de febrero de 2022 el Colectivo de Mujeres en Voz Alta remitió oficio al Congreso del Estado de Nayarit para hacerle llegar una propuesta a fin de que fuera considerada en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 de la XXXIII Legislatura. La propuesta consistió en una iniciativa para garantizar el cumplimiento de la paridad total real en los poderes ejecutivo, judicial, órganos autónomos y organismo públicos descentralizados.

Ahora bien, respecto del amparo en revisión que interpuso la colectiva MEVA con motivo del incumplimiento de la paridad en Nayarit, la resolución fue negativa. El Tribunal colegiado resolvió sobreseer el amparo en revisión sin entrar al fondo, por argumentar una causal de improcedencia. La causal de improcedencia la hace residir en cuanto a que el Tribunal Colegiado argumenta que la vía del amparo no es procedente, y sugiere que la vía procesal correspondiente es un JDC, un juicio para la defensa de los derechos políticos electorales.

Con esta resolución se dio por terminado el proceso que la colectiva inició un año atrás. Desde luego, una de las estrategias planteadas por el grupo era subir el expediente a la corte, sin embargo, no fue posible hacerlo, en virtud de que el tribunal colegiado resolvió antes de lo previsto y el caso se cerró.

Debe hacerse notar que el tema de paridad total es un principio nuevo, que los jueces y magistrados no saben cómo manejarlo para lograr su acatamiento por los gobernadores. Con el proceso penal, la colectiva MEVA dio un paso adelante en el cumplimiento de derechos ya ganados. El procedimiento del amparo fue parte de seguir trabajando en pos de la conquista de la realización real de los derechos.

La casi paridad del gobierno estatal

Para agosto de 2023, se tiene una casi paridad en el Poder Ejecutivo de Nayarit, puesto que se han nombrado seis mujeres de 13 en secretarías de Estado: 1) Myrna Aracely Manjarrez Valle en la Secretaría de Educación; 2) Dora Cecilia Espinoza González en Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, 3) Sistiel Karime Buhaya Lora en la Secretaría de Movilidad; 4) María Isabel Estrada Jiménez en la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza; 5) María de los Ángeles Mares López en la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral y 6) Rocío Esther González García en la Secretaría General de Gobierno. Esta última fue nombrada Secretaria General después que terminó su periodo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.

Reflexiones finales

La paridad de género es un paso fundamental para lograr el cumplimiento del principio de igualdad establecido en la propia constitución y en diversos tratados internacionales.

Las mujeres Nayaritas tenemos el derecho constitucional de acceder a los cargos públicos, de estar representadas en igualdad de condiciones y circunstancias, y contar con un gabinete

integrado de forma paritaria, en observancia con la Constitución federal y la Constitución local, así como a las leyes secundarias correspondientes.

Las mujeres tenemos el derecho de estar representadas por otras mujeres en el poder público y, sobre todo, en la toma de decisiones. Ello permitirá ejercer el poder en las distintas áreas de salud, de educación, economía, turismo, desarrollo social, bienestar, medio ambiente, seguridad pública, movilidad, infraestructura, desarrollo rural y en cada área dónde se tomen decisiones, como un postulado fundamental que protege el derecho de participación de las mujeres en los asuntos públicos y el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Debe decirse que, no obstante la reforma constitucional federal que garantiza el principio de paridad de género, las mujeres seguimos siendo relegadas y discriminadas en Nayarit, al ser negado el acceso a los cargos públicos de forma paritaria, toda vez que no solo la autoridad responsable viola el precepto constitucional de paridad de género, sino que los juzgados de distrito hacen nugatorio el acceso a la justicia, al decidir no resolver el fondo del asunto.

En ese orden de ideas, si en términos generales, las mujeres no somos partícipes de los ámbitos en donde se toman las decisiones públicas, y carecemos del poder fáctico necesario para afectarla, el ámbito de la justicia representa la única oportunidad de introducir la voz y perspectivas en la deliberación pública. Por ello, la vía del amparo puede proporcionar un camino para hacer posible la paridad en la integración del Poder Ejecutivo.

¿Se puede garantizar el derecho a la paridad en las secretarías del Poder Ejecutivo? Si la paridad en todo es un principio constitucional, ¿se puede garantizar su cumplimiento? Se ha argumentado que se trata de un principio como mandato para los gobernadores directamente aplicable, sin que medie la voluntad de quien lo debe cumplir. Sin embargo, en los hechos es necesario garantizar el ejercicio de este derecho a fin de ser salvaguardado. Tampoco se puede hacer depender su cumplimiento de legislación secundaria al respecto, puesto que se retrasaría su aplicación además de que haría depender las normas constitucionales de legislación secundaria.

Tanto Nayarit como Sinaloa han abierto una ruta a través de los amparos para lograr el cumplimiento de la paridad. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible, por lo que es posible pensar que mientras que no existan sanciones al incumplimiento de la paridad, su ejercicio real no será posible.

Para el cumplimiento de la paridad sería importante que la Suprema Corte de Justicia atrajera los casos como una causa superior de justicia electoral, a fin de que se establezcan precedentes sobre la judicialización de los casos.

Referencias bibliográficas

Diario Oficial de la Federación (2002). “Sentencia y voto particular relativos a la Acción de Inconstitucionalidad 2/2002, promovida por el Partido Acción Nacional, en contra de los órganos Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila. *Diario Oficial de la Federación*. 18/03/2002.

Pacheco, Lourdes, coord. (2007). *Cuando la democracia nos alcance*. México: Juan Pablos Editores/Universidad Autónoma de Nayarit.

Peña, Blanca. 2014. “La paridad de género: eje de la reforma político-electoral en México”. *Revista Mexicana de Estudios Electorales* 14: 31-74. México: Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.